

UN DEBATE PÚBLICO FRUSTRADO. EL CONFLICTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE 400.000 VOLTIOS EN EL NORDESTE DE CATALUÑA

JOAQUIM SEMPÈRE

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Recepció: 30/06/2011; acceptació: 14/10/2011

RESUMEN

UNA PLATAFORMA POPULAR Y UN GRUPO DE MUNICIPIOS DEL NORESTE DE CATALUÑA SE OPONEN A UNA LÍNEA ELÉCTRICA DE MUY ALTA TENSIÓN ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA POR SUS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS Y AMBIENTALES. RECURREN A EXPERTOS PARA REFORZAR SU POSICIÓN Y ELABORAN ARGUMENTOS Y ALTERNATIVAS DE ALTA CALIDAD TÉCNICA. LOS PROMOTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL PROYECTO SE ENFRENTAN A UNA SOCIEDAD CIVIL QUE NO ES ATOMIZADA NI AMORFA, SINO CAPAZ DE ARTICULARSE Y DOTARSE DE SABER CIENTÍFICOTÉCNICO. SE REÚNEN ASÍ LAS CONDICIONES PARA UN DEBATE PÚBLICO Y UNA GOBERNANZA PARTICIPATIVA, Y NO SÓLO SOBRE LA LÍNEA ELÉCTRICA, SINO TAMBIÉN SOBRE EL MODELO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD. PERO NI LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS NI LOS GOBIERNOS IMPLICADOS ACEPTAN EL RETO.

PALABRAS CLAVE:

CONFLICTO SOCIOECOLÓGICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBERNANZA, EXPERTOS, DEBATE PÚBLICO, APTENDIZAJE COLECTIVO

La interconexión eléctrica entre España y Francia por la parte oriental de los Pirineos empezó a plantearse en 2001 como acuerdo entre los gobiernos de ambos países. Pronto despertó inquietud en la población de las zonas afectadas a ambos lados de la frontera, y surgieron movimientos de oposición al proyecto.¹ El presente trabajo examina los intentos de participación ciudadana y el papel del saber científicotécnico en el conflicto que opuso a estos movimientos con los promotores, públicos y privados, de la línea de muy alta tensión en territorio español. Los promotores públicos son los go-

biernos francés y español y el gobierno autonómico de Cataluña. Las empresas promotoras en España son la privada Endesa y la semipública Red Eléctrica de España (REE).

ENTRE EL RECHAZO A LAS TORRES Y LA DEFENSA DE UNA NUEVA CULTURA DE LA ENERGÍA

Está previsto que una línea eléctrica de muy alta tensión (MAT), de 400.000 voltios, enlace próximamente las redes española y francesa, desde Sentmenat (Barcelona) hasta Baixàs (de-

¹ El movimiento en Francia es objeto de otro estudio en este mismo número de *Arxivus*: véase págs. 11 y ss.: «El movimiento experto y sus fronteras. El caso del compromiso sociotécnico en torno a la línea de muy alta tensión Francis-España».

partamento de Pirénées-Orientales). Una parte de esta línea, en Francia y parcialmente en España, irá soterrada, y el resto requerirá enormes torres de soporte de hasta 60 metros de altura o más, con bases de entre 200 y 400 metros cuadrados y corredores de más de 400 metros de anchura durante unos 60 km de recorrido. El impacto visual y ambiental de estas torres será muy grande. Las protestas populares, que empezaron en 2001 en Francia y a finales de 2004 en España, hicieron cambiar el proyecto inicial de una línea aérea en todo su recorrido, pero sólo en territorio francés; en territorio español los adversarios del proyecto no lograron más que una modificación parcial —un soterramiento en dos tramos breves— del proyecto.²

Muchas de las personas movilizadas, en Francia y en España por igual, se sintieron frustradas porque lo que ellas ponían en entredicho no era sólo el trazado aéreo de la línea, sino todo el modelo de producción y distribución eléctrica hoy vigente. Como dice un llamamiento de la Plataforma para recoger firmas contra la línea,

[a]l mismo tiempo queremos impulsar una nueva cultura de la energía basada en el ahorro y la eficiencia energéticos, la gestión de la demanda y la generación eléctrica de fuentes renovables cerca de los lugares de consumo, desterrando para siempre jamás el modelo obsoleto basado en grandes líneas de transporte.

Y uno de los activistas, Xavier Llorente, habla de «generación distribuida, cercana a los puntos de consumo».³ Además de no haber logrado sus objetivos, les quedó el regusto amargo de no haber podido desencadenar en ninguno de los dos países un debate social de gran alcance: el del modelo energético del futuro.

¿LUCHA DE INTERESES O DISTINTAS NOCIONES DE PROGRESO?

El episodio en cuestión tiene muchas facetas. Por una parte responde a la actuación de dos gobiernos estatales en el marco de una política europea de interconexión eléctrica generalizada entre países, que responde a un modelo de producción y distribución eléctrica hoy dominante en los países desarrollados basado en grandes centrales de producción. Esa actuación moviliza intereses de las empresas promotoras y se inspira en el mencionado modelo (considerado más o menos indiscutible) y en creencias sobre el progreso por parte de los gestores, ingenieros y técnicos implicados en el proyecto. Por otra parte, las torres tienen efectos paisajísticos que perjudican a muchas personas que viven en los espacios afectados, no sólo desde un punto de vista estético y sentimental, sino también económico, como se indica más adelante. Las personas que se movilizaron contra la línea en su mayoría no tenían demasiados conocimientos específicos sobre el problema, del cual en el curso de su lucha fueron descubriendo dimensiones ignoradas. Se vieron llevadas a preguntarse si una línea eléctrica tan agresiva era necesaria y si no había otras soluciones para resolver el problema del suministro eléctrico. Examinado de cerca, el conflicto muestra muchas dimensiones: por un lado, diferencias sobre el modelo energético, sobre la noción de progreso, sobre la relación del ser humano con su entorno natural y vital; por otro, choques de intereses económicos y nociones discrepantes sobre la democracia y la gestión política.

El proyecto provocó en la Cataluña francesa ya desde 2001 una oposición de más de 200 municipios, que se agruparon en la asociación de municipios Sydeco THT66, y de la plataforma ciudadana Non à la THT.⁴ A finales del 2004 la

² La línea prevista, de 400 kV, arrancararía de Sentmenat hacia Bescanó, Santa Llogaia d'Àlguema (cerca de Figueres) y Baixàs (Pirénées-Orientales). Sólo el tramo Santa Llogaia-Baixàs estaría soterrado, es decir, todo el recorrido en territorio francés y un tramo menor en territorio español. El resto del recorrido en territorio español sería una línea aérea, salvo un tramo cercano a la ciudad de Girona, también soterrado.

³ La frase sobre una «nueva cultura de la energía» figura en el llamamiento para recoger firmas que puede consultarse en la web de la Plataforma (www.nomat.org). Las declaraciones de Xavier Llorente se publicaron en el diario gerundense *El Punt* (27/05/09).

⁴ THT es el acrónimo de Très Haute Tension, Muy Alta Tensión.

oposición al proyecto se trasladó al Sur de los Pirineos. En la Cataluña española 63 municipios se agruparon en la asociación AMMAT y, además, se constituyó una plataforma ciudadana que agrupó a activistas de distintas procedencias, sobre todo de plataformas de defensa del territorio —muy particularmente *Salvem l'Empordà*, basada en Figueres—. Ambas entidades impulsaron una oleada de protestas entre 2005 y 2009. Las primeras noticias del proyecto desencadenaron profunda inquietud por razones sobre todo estéticas, identitarias y en algunos casos económicas (este fue el caso de empresarios de turismo rural, cuya capacidad de atracción turística se veía seriamente amenazada, pero también de propietarios rurales que iban a experimentar una pérdida importante del valor patrimonial de sus fincas). Es importante señalar la simpatía que la protesta despertó mucho más allá de quienes podían temer por su economía, expresada en asambleas, manifestaciones y recogidas de firmas.

ELABORACIÓN CIUDADANA DE UN DISCURSO ALTERNATIVO TÉCNICAMENTE SOLVENTE

Los primeros activistas que iniciaron la protesta —como es habitual en este tipo de movimientos— trataron de agrupar los motivos del descontento y de formularlos con un discurso coherente capaz de aportar argumentos a la paralización del proyecto y, si acaso, a su reformulación sobre otras bases. Desde aquel mismo momento la protesta buscaba una legitimación susceptible de crear una corriente de simpatía en la opinión pública para lograr parar el proyecto. Lo primero fue buscar el asesoramiento de expertos en energía para saber si la línea de 400 kV era realmente necesaria para los fines invocados por sus promotores. El resultado fue un documento

publicado en 2005⁵ que contiene los argumentos técnicos fundamentales que los oponentes al proyecto invocarán durante toda su lucha, en respuesta a las justificaciones del mismo por parte de sus promotores.

Ante todo, pues, conviene referir cuáles son esas justificaciones. En una entrevista televisiva emitida en 2006,⁶ el entonces director técnico de la presidencia de Red Eléctrica de España,⁷ Agustí Maure —que a los pocos meses (17/04/2007) iba a ser nombrado director general de Energía y Minas de la Generalitat de Cataluña por el gobierno tripartito de izquierdas— las formulaba así: (1) en el marco europeo de liberalización del comercio de la energía, se necesita una interconexión eléctrica entre todos los miembros de la UE que sea capaz de transportar un 10% de la demanda interna máxima de un país (en España este 10% equivale a más de 4.000 MW); (2) la provincia de Gerona (la afectada por la MAT en cuestión) tiene problemas de suministro porque sólo genera el 10% de la electricidad que consume, y además necesita una alimentación eléctrica excepcional durante los meses de afluencia turística en el Ampurdán y la Costa Brava); Gerona, además, es la única provincia española que carece de línea de 400 kV; y (3) el paso del AVE, que ha de entrar en funcionamiento hacia 2012, requiere una línea MAT de este voltaje.

A estos argumentos, los más utilizados de cara al público por las administraciones —sin distinción de color político: PSC-PSOE, PP y CiU⁸ han apoyado y apoyan por igual la MAT— y por las compañías eléctricas, tanto REE como Endesa, se pueden añadir otros dos normalmente silenciados.

El primero es que Francia tiene un excedente de electricidad, debido sobre todo a su enorme parque de centrales nucleares, y necesita infraestructuras para vender este excedente —en este caso no sólo a

⁵ «Línea de 400.000 v. Sentmenat-Bescanó-Figueres-Baixàs. Necessitem a les comarques gironines una línia de molt alta tensió?», Gerona, enero de 2005, 16 páginas.

⁶ Entrevista a Agustí Maure de Mònica Terribas en el programa «La nit al dia» de TV3 (Televisió de Catalunya) de 22/11/2006. Cf. www.tv3.cat/videos/216705139.

⁷ Red Eléctrica de España (REE), inicialmente pública, tiene actualmente un 70% de capital privado.

⁸ Del arco parlamentario catalán, sólo ICV-EUiA y ERC se opusieron a la línea.

España, también a Portugal y el Norte de África.⁹ El segundo es el macroproyecto Desertec impulsado desde la Unión Europea, que consistiría en un amplio despliegue de instalaciones de energía solar y eólica en zonas desérticas o despobladas de varios países del Norte de África para consumo propio y para exportar a Europa. Este proyecto, que se prolongaría en el Levante mediterráneo enlazando el Oriente Próximo con Turquía y Europa del Este —formando un «anillo eléctrico del Mediterráneo», anunciado en 2006 por el presidente de la red eléctrica francesa RTE—, requiere un sistema de interconexión MAT muy completo entre países y entre las dos orillas del Mediterráneo. La línea MAT programada en Cataluña formaría parte de esta interconexión.

El informe técnico de la Plataforma No a la MAT de 2005 —en cuya elaboración intervinieron varios expertos, entre ellos el ingeniero Josep Puig i Boix, especialista en temas energéticos— refutaba los dos argumentos «locales» de los promotores de la línea, sin entrar en la cuestión de la interconexión internacional. El informe técnico, a la vez que reconocía los problemas de suministro de la provincia, formulaba una solución diferente, menos costosa económica y ambientalmente: reforzar la línea de 220 kV ya existente (intervención que no exige nuevos trazados ni indemnizaciones, y que apenas modifica el impacto ambiental de la infraestructura ya existente). Respecto al AVE, recuerda que son varios los tramos del tren español de alta velocidad que funcionan sin problemas con líneas de 220 kV, y que por tanto el argumento no vale.¹⁰

DIFICULTADES DE LOS MOVIMIENTOS CIUDADANOS PARA ACCEDER AL SABER EXPERTO

Este informe fue la primera pieza de una serie de trabajos hechos por miembros de la Plataforma o

encargados por ella o por la asociación de municipios AMMAT a expertos ajenos al conflicto. Algunas circunstancias merecen ser recordadas al respecto. Una de ellas es el papel pionero desempeñado por la oposición a la línea en territorio francés, que había empezado, como se ha dicho, cuatro años antes y en un país con mayor tradición democrática, mayor potencial científico y un marco legislativo más favorable a la participación ciudadana. La segunda circunstancia es la dificultad con que toparon tanto la Plataforma como la AMMAT para encontrar técnicos dispuestos a asesorarles. Muchos de los técnicos solicitados no quisieron hacer ese trabajo por temor a represalias laborales de las Administraciones públicas y de las grandes empresas eléctricas, que son sus principales empleadores o clientes. Los adversarios de la MAT vivieron en carne propia las disfunciones creadas por la concentración de poder —económico y político— en el control del saber experto y se dieron cuenta de que la neutralidad del conocimiento es un ideal de difícil cumplimiento.

Esta inhibición de los expertos sólo se desbloqueó cuando el CILMA (Centre d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines), organismo de la Diputación de Gerona, aceptó promover y financiar un estudio pluridisciplinario a petición de los municipios de la AMMAT. De hecho las diputaciones funcionan como «redes de municipios» y, por tanto, les corresponde atender a las demandas de los ayuntamientos. En otoño-invierno del 2009 se publicó un número monográfico del boletín de este Centro bajo la rúbrica de «La viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques de Girona» para evaluar desde varios puntos de vista el soterramiento de la línea como alternativa a su trazado aéreo. Hay que recordar que el movimiento pronto, sin llegar a dividirse, tomó dos caminos divergentes. La Plataforma siguió oponiéndose a

⁹ Véase la evolución del saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica del Estado español. En 2000 se importaron de Francia 7907 GWh, de los que se consumieron 4441 en España y se exportaron 931 a Portugal, 272 a Andorra y 2263 a Marruecos. En 2004 se importaron de Francia 5174 GWh y se exportaron 6254 a Portugal, 287 a Andorra y 1457 a Marruecos (de modo que España había dejado de tener déficit cubierto con la importación de electricidad de Francia y había pasado a exportar 2939 GWh de producción excedentaria propia).

¹⁰ Técnicos del Colegio de Ingenieros de Cataluña reconocen que esto es así, pero consideran que una línea de 400 kV da más garantías para hacer frente a la suma de demandas del AVE y de las puntas de consumo eléctrico debidas al turismo veraniego.

la MAT en todas sus formas, incluso soterrada, por considerar que es una infraestructura que corresponde a un obsoleto sistema centralizado de producción eléctrica, concentrada en pocas centrales y, por tanto, dependiente de una red de distribución faraónica; frente a este sistema, la Plataforma se pronuncia por un modelo descentralizado de «generación distribuida» dotado de numerosos puntos de captación de energía renovable (fotovoltaica, eólica, minihidráulica, de biomasa, con cogeneración, etc.).¹¹

Por su parte, los ayuntamientos asociados en la AMMAT, obligados a ofrecer soluciones tangibles y a corto plazo a la población, aceptaban que la línea era inevitable—teniendo en cuenta, especialmente, que respondía a una política integral europea y, en el caso de la línea en cuestión, a acuerdos formales entre los gobiernos español y francés— y se proponían luchar a favor del soterramiento para evitar los inconvenientes de la línea aérea. También en este punto los españoles se inspiraban en los planteamientos hechos en la parte francesa desde un tiempo antes. Por esto el estudio del CILMA se ocupaba de la viabilidad del soterramiento, tanto eléctrica como constructiva, medioambiental, económica, sociopolítica y de implantación territorial.¹² Una crítica muy llamativa de este estudio monográfico es que los estudios de costes económicos de los promotores de la MAT contemplan sólo los costes directos de instalación, pero no los indirectos: pérdida de bienestar, pérdida del valor de los terrenos y viviendas afectados, impacto en las actividades económicas relacionadas con el turismo, impacto paisajístico, entre otros, a los que hay que añadir los costes de explotación, mantenimiento y desmantelamiento

de las líneas. Y que si se aprovecharan las líneas ya existentes mejorándolas y reforzándolas habría considerables ahorros en materia de indemnizaciones. Considerando todos estos costes, «se reduce substancialmente la diferencia entre el coste de la solución aérea y el de la solución soterrada, alcanzándose un factor [multiplicador] de 2 en lugar de un factor de 6» (p. 17). Esta valoración queda muy lejos de la de otros técnicos, pero no hubo una confrontación de valoraciones con todos los datos sobre la mesa.

LAS CONDICIONES ESTABAN REUNIDAS, PERO EL DEBATE PÚBLICO NO TUVO LUGAR

A estos temas se incorporó la preocupación por los efectos que una línea MAT pudiese tener sobre la salud de las personas, y en particular por los efectos de los campos electromagnéticos. Había indicios de que esos campos provocan leucemia sobre todo en niños. El radiofísico Pere Carbonell, miembro de la Plataforma, intervino aportando datos y estudios sobre la relación estadística entre campos electromagnéticos y leucemia infantil (objeto de varias investigaciones en las que ha participado) cuyas conclusiones aconsejaban continuar la investigación porque las correlaciones observadas eran significativas, y polemizando en publicaciones especializadas y en la prensa general con las posiciones expresadas por autoridades catalanas y representantes de las eléctricas según las cuales se trata de una polémica superada y el riesgo es insignificante.¹³ Hay que recordar que en Francia ni los adversarios de la línea ni las autoridades y los promotores consideraron zanjado este asunto, que

¹¹ El modelo de «generación distribuida» no es una tecnología madura. Está en fase de investigación y experimentación. Plantearlo como alternativa supone un cierto salto en el vacío, y por eso la Plataforma propuso, en el documento mencionado, soluciones realistas a corto plazo dentro del modelo existente. Proponer este modelo era una manera de abrir un debate público sobre el futuro de la electricidad y el papel de las fuentes renovables. Ni el gobierno ni las compañías eléctricas tuvieron el menor interés en participar en dicho debateonato.

¹² Los autores del estudio son las siguientes entidades y personas: MOST Engineers (expertos consultores en obra civil); Taller d'Estudis Palop-TEP (viabilidad eléctrica); General Cable, Silec Cable (viabilidad eléctrica); Daniel Depris, físico belga autor de un estudio de impacto ambiental; Fractàlia-La Copa, estudio de impacto ambiental en la zona de Riudarenes; equipo de economistas e ingenieros de la Universidad de Gerona bajo la dirección de Anna Garriga (estudio incorporado al informe ambiental de Fractàlia-La Copa).

¹³ En la mencionada entrevista (véase nota 6, *supra*) Agustí Maure sostiene que se habló mucho de este riesgo hace 15 o 20 años, pero que no hay ningún indicio fuerte, aludiendo a «informes de alta investigación avalados por la OMS», sin más precisiones.

motivó intervenciones de médicos y otros especialistas. Pere Carbonell envió en enero de 2010 una carta al diario gerundense *El Punt* como réplica al artículo de Agustí Maure «La MAT: cargolant el paisatge humà» (publicada en el mismo diario el 13 de enero de 2010), en la que cita cuatro trabajos recientes sobre el tema.¹⁴ Nunca obtuvo respuesta ni oferta de diálogo.

Los adversarios de la línea, en suma, lograron reunir durante cuatro años de movilización un conocimiento nada desdeñable de lo que estaba en juego con el proyecto, que les permitía polemizar en plano de igualdad con los promotores del mismo. El tipo de expertos y la calidad y número de los mismos daban pie a un proceso interesante, potencialmente enriquecedor, de debate público sobre cómo enjuiciar el proyecto y sobre propuestas alternativas. Los interlocutores estaban presentes, frente a frente, armados con sus conocimientos y sus razonamientos. Pero el debate no tuvo lugar.

Esto no significa que no hubiera ningún intento de contrastar las opiniones de una y otra parte. Lo más parecido a un debate fue la comparecencia ante la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento de Cataluña, que se celebró el 5 de mayo de 2009, de cuatro entidades: la Cámara de Comercio de Gerona y el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, por un lado, y, por otro, la AMMAT y el CILMA. Estas dos entidades defendieron la viabilidad técnica y económica del soterramiento en los términos antes descritos. Pero la comisión parlamentaria, una vez escuchadas las partes, no abrió un auténtico proceso de contrastación y diálogo. El proyecto del gobierno quedó reforzado por el silencio parlamentario, y el aparente debate quedó en mero simulacro.

La opinión de los opositores a la MAT es tajante: no se quiso discutir; ni el gobierno, ni los partidos políticos mayoritarios (ni en el parlamento ni fuera), ni las empresas (REE y Endesa) quisieron participar en auténticos debates públicos; tenían puntos de vista cerrados e inalterables; para ellos

la línea era una necesidad indiscutible y se limitaban a formular una y otra vez el mismo estribillo: Gerona necesita la MAT y el AVE también, la MAT es el progreso.

Todos los activistas contra la línea entrevistados concuerdan en que fueron despreciados como personas y como ciudadanos, sus opiniones técnicas nunca fueron tomadas en consideración y no se quiso siquiera negociar con ellos en asuntos discutibles como el soterramiento. Hubo numerosos actos informativos en muchas localidades afectadas de cerca o de lejos por la línea, pero puede decirse que raramente hubo un intento real de debate.

UNA CIUDADANÍA IGNORADA Y MENOSPRECIADA

Más allá de las dificultades para lograr la colaboración de los expertos ajenos al conflicto, el análisis de las publicaciones de los opositores a la MAT y el testimonio de las personas entrevistadas revelan que el conflicto desencadenó un proceso colectivo de estudio y reflexión sobre los temas implicados, con dos resultados. En primer lugar, la pregunta por el sentido de la MAT planteó un examen crítico del modelo de producción y distribución de electricidad. Cuando se hizo evidente que la razón de fondo de la línea era la interconexión europea generalizada, surgió la pregunta de si no era posible una estructura más local y descentralizada de producción basada en energías renovables, con menos transporte de electricidad a larga distancia y menos pérdidas. Pero el debate en torno a esta opción nunca se produjo, aunque la movilización ciudadana sirviera para darla a conocer entre la opinión pública.

Los adversarios de la línea no veían la opción por uno u otro modelo como una cuestión meramente técnica. La veían como una contribución a un modelo alternativo de sociedad, y también como algo que debe discutirse ampliamente entre toda la ciudadanía. Una economista, activista de la Plataforma, vincula la opción sobre el modelo técnico

¹⁴ «Risk factors for leukemia in Thailand», *Annals of Hematology*, 88 (2009); «Most cancer in firefighters due to radiofrequency radiation», *Medical Hypotheses*, 73 (2009); «Effects of extremely low-frequency magnetic fields», *Bioelectromagnetics*, 30 (2009); «Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans», *IARC*, 80 (2002).

con el ejercicio de la democracia, indicando que a algunos opositores les importa no sólo el impacto visual, la destrucción del paisaje, los riesgos para la salud y los efectos económicos colaterales, sino el modelo energético mismo y la capacidad de las poblaciones para decidir cuál prefieren. He aquí sus palabras:

Vinieron [a Bescanó] seis señores de Endesa a explicarnos que esta central térmica [la central de gas de ciclo combinado que ofrecían instalar en Bescanó] que nos vienen a instalar la pintarán de colorines y su impacto será cero. Que no nos preocupemos de la contaminación porque será la central más eficiente de España y del mundo. Y el director general de Energía [de la Generalitat de Cataluña] vino aquel mismo día, y defendía la propuesta de Endesa. No atendió a ninguna de nuestras peticiones. De que nos demostrase, por ejemplo si con energías alternativas no se podría hacer la misma función. Que nos lo demostrasen, que no nos impusiesen la central térmica, que nos dejaran elegir, como comarca [...], si la energía que queremos es la térmica, la solar o la eólica, que nos dejen escoger. Y nunca hemos tenido respuesta (E3).

La versión de todos los entrevistados contrarios a la MAT coincide: «no sólo no quieren dar la cara, sino que esconden información a la población» (E3), hubo «mucho secretismo», «nunca se han dado explicaciones», se entregó al *conseller* de Política Territorial, Joaquim Nadal, una carta con 750 firmas «y no nos contestó», tampoco contestó «el presidente Montilla [...] y sé de otra gente que ha hecho cosas semejantes con el mismo resultado» (A4).

Invocan otros datos en el mismo sentido. Cuando la asociación AMMAT no conseguía asesoramiento de expertos del país—según testimonio de Xavier Quer, alcalde de Crespì y presidente de AMMAT—, acudió a la consultora italiana CESI, que aceptó, pero no pudo hacer su trabajo porque ni las empresas ni el gobierno le facilitaron los datos para el estudio, contraviniendo el deber de información y transparencia que tienen las empresas y el deber que tienen los gobiernos de garantizarlas. (Cuan-

do el mediador de la Unión Europea solicitado por los gobiernos español y francés se dirigió al mismo gabinete de estudios italiano, entonces sí consiguió éste los datos que antes se le negaban.)

El «enfado» y la «desmoralización» denunciados por todos los entrevistados se acompaña de un lamento generalizado por la falta de hábitos democráticos en la sociedad española y la falta de sensibilidad democrática de los gobernantes, que se traduce también en el incumplimiento de convenios internacionales que deberían obligar a las Administraciones públicas a una mayor apertura a la sociedad. Concretamente, el Estado español firmó al convenio de Aarhus, pero no lo aplica. Este convenio establece que «en intervenciones que van más allá de ciertas dimensiones, hace falta un procedimiento de concertación previo al proyecto» (A4). Este procedimiento es el que aplican las autoridades francesas. Antes de elaborar el proyecto, los delegados del gobierno negocian con los representantes territoriales, tanto de las instituciones políticas (alcaldes y diputados) como de la sociedad civil, y el proyecto sólo se diseña cuando se ha logrado un acuerdo previo. En España las autoridades elaboran el proyecto y luego lo someten a «información pública»: tanto instituciones como particulares tienen un periodo acotado (30 días) para presentar alegaciones. No es de extrañar que haya «admiración y envidia hacia Cataluña-Norte» y que se declare que, en España, «vivimos en una dictadura» (A5).

¿ERA POSIBLE UN EJERCICIO DE «DEMOCRACIA DIALÓGICA»?

En este conflicto socioecológico se daban las condiciones para un auténtico debate nacional. El proyecto de la línea MAT se había diseñado lejos del territorio, por parte de ingenieros y técnicos al servicio de las compañías eléctricas y los gobiernos bajo la invocación de supuestos intereses generales—materializados según los promotores de la línea en las necesidades eléctricas de la provincia de Gerona y del tren de alta velocidad. Pero en el territorio aparecieron pronto unos actores sociales con intereses distintos aunque también con ideas

y propuestas que contenían otra noción del «interés general». Estas ideas permitían manejar y abordar incertidumbres que el proyecto oficial no había considerado o había desestimado como no significativas: los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos, los perjuicios para el turismo rural o la afectación de acuíferos.¹⁵ Estaban reunidas las condiciones para un debate público en que podían cooperar los expertos de ambos bandos y también personas que aportaban puntos de vista complementarios potencialmente enriquecedores para poder tomar decisiones informadas. Parecía viable un ejercicio de «democracia dialógica» (Callon et al. 2001:25) enriquecedora de la democracia representativa tradicional. Pero no lo fue porque los representantes del poder económico y político no aceptaron el reto. Uno de los resultados del conflicto, en esas condiciones, fue una enorme pérdida de confianza en las instituciones y en los políticos y un sentimiento de desmoralización entre los activistas que se movilizaron. Todas las personas entrevistadas coinciden en ello.

DOS ÁRBITROS NEUTRALES: EL MEDIADOR EUROPEO Y EL «SÍNDIC DE GREUGES»

Para contrastar este sentimiento de desconfianza de los activistas se puede recurrir a dos intervenciones institucionales ajenas a las partes en el conflicto y que aparecen como árbitros neutrales: en primer lugar, el mediador de la Unión Europea solicitado por los gobiernos español y francés para aproximar puntos de vista entre ambos gobiernos y los territorios afectados; en segundo lugar, el Síndic de Greuges de Cataluña.¹⁶

La intervención del mediador, Mario Monti, era consultiva: no podía resolver una cuestión que dependía del acuerdo entre dos gobiernos. Pero sirvió para desbloquear las barreras a la información,

puesto que permitió a la consultora italiana CESI, antes mencionada, acceder a datos que no había podido conseguir cuando trabajó para los ayuntamientos de la AMMAT. Las conclusiones de Monti fueron, cuando menos, imprecisas. Así, por ejemplo, desaconsejó el soterramiento entre Bescanó y Santa Llogaia (en territorio español), pero dejando la puerta abierta a esta solución «si los técnicos lo consideran necesario», a la vez que propuso la solución ya pactada en Francia entre el gobierno y las entidades y representantes del territorio, que es el soterramiento entre Santa Llogaia y Baixàs, en Francia, una línea de más de 50 kilómetros en corriente continua. Monti declaró que «la longitud del tramo que se haga subterráneo dependerá de la presión que haga el territorio y de su capacidad para argumentar a favor de esta solución». Monti no encontró razones insuperables para adoptar las soluciones propuestas por los adversarios de la MAT, tanto en Francia como en España, y por tanto deslegitimó los argumentos invocados por las compañías eléctricas españolas y los gobiernos español y catalán.¹⁷

Por su parte, el Síndic de Greuges se hizo eco de los obstáculos a la información y al diálogo denunciados por los oponentes a la línea. En su resolución de 11 de marzo de 2008 enviada a los Departamentos de Economía y Finanzas y Vivienda y Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña,¹⁸ hace constar que ambos departamentos, obligados por ley a entregar los informes solicitados por el Síndic en un plazo máximo de 15 días, lo habían demorado once meses. A la vista de la documentación presentada por la Plataforma No a la MAT, la resolución critica la falta de transparencia de la Generalitat y la falta de voluntad para fomentar una participación real de la población en las tomas de decisiones. En el apartado de su resolución titulado «5. La participación ciudadana y el acceso

¹⁵ Este es un riesgo que se hizo visible cuando se proyectó el soterramiento como resultado de la presión de los alcaldes. En la frontera franco-española de Le Perthus el túnel previsto podía interferir con un acuífero que alimenta algunas poblaciones de la Costa Brava septentrional.

¹⁶ Equivalente del Ombudsman, o del Defensor del Pueblo español.

¹⁷ Véase *Diari de Girona*, 29/10/08; *El Periódico de Catalunya*, 30/10/08; Canal Nord TV (Figueras), 29/10/08. Se pueden encontrar en la web de la Plataforma: www.nomat.org.

¹⁸ *Resolució del Síndic amb relació a la tramitació del projecte relatiu a la construcció d'una línia elèctrica de 400 kV (MAT)*.

a la información en materia de medio ambiente», el Síndic dice lo siguiente:

La definición jurídica de la participación de los ciudadanos y la instrumentación de esta participación por medio de herramientas legales que la hagan realmente efectiva constituyen hoy uno de los terrenos en que ha progresado con más intensidad el derecho medioambiental internacional y, por extensión, el derecho comunitario y el de los estados de la Unión Europea.

Un hito en este proceso es el Convenio de Aarhus —ratificado por España en 2004— que parte del postulado siguiente: para que los ciudadanos puedan gozar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir con el deber de respetarlo y protegerlo han de tener acceso a la información medioambiental relevante, han de estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y han de tener acceso a la justicia cuando estos derechos le sean negados (p. 6).

¿Ha sido adecuada la voluntad del gobierno catalán de fomentar la participación? La resolución lo niega con mucha claridad:

Las informaciones en prensa, la publicación en el BOE, en el DOGC o en otros boletines oficiales de los trámites de información pública o de otros tipos son iniciativas encaminadas a garantizar los derechos de información de los ciudadanos, pero que a veces requieren un esfuerzo informativo complementario y proporcional a la magnitud del proyecto, que no se ha hecho en este caso y que sería del todo necesario (p. 9).

La resolución del Síndic enfatiza esta idea sugiriendo la inauguración de un sitio-web de la Generalitat desde donde se informe más ágilmente al público y así se pueda promover mejor la participación ciudadana.

APRENDIZAJE COLECTIVO Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Las personas entrevistadas se lamentan del escaso efecto de sensibilización y aprendizaje que la movilización ha tenido en la población en general.

Aluden a la despreocupación de la gente, la volatilidad de sus opiniones, la falta de constancia en su lucha, las tendencias acomodaticias inducidas por el consumismo... Al decir esto expresan su decepción por los resultados de sus esfuerzos como activistas que dedicaron durante años muchas horas y mucho trabajo a las movilizaciones. Pero probablemente minusvaloran algunos resultados que son visibles para un observador externo, como la enorme cantidad de pintadas «No a la MAT» que se pueden ver paseando por zonas de la comarca de La Selva (y que son la huella indeleble de la actividad de numerosas personas), o las instalaciones fotovoltaicas en tejados de edificios municipales de Santa Coloma de Farners. ¿Es sólo un «lavado de imagen» del consistorio, como dice una entrevistada, o un resultado de la sensibilización por los temas energéticos? ¿No hay ahí una señal de que la nueva cultura de la energía ha dado algún paso adelante?

Fueron muy numerosas las asambleas informativas que tuvieron lugar en muchas localidades de las zonas afectadas, convocadas por los ayuntamientos, por la Plataforma o por entidades locales. Los entrevistados reconocen su función educativa sobre la población, pero a la vez coinciden en su inutilidad para abrir un auténtico diálogo entre sociedad civil y poder económico y político. Los mediadores institucionales que han intervenido en el conflicto no pueden acusar a esas autoridades de haber conculcado las normas establecidas; pero señalan, expresamente o no, su falta de sensibilidad hacia lo que Marilyn Strathern (1999:156-180) llama «proliferación de lo social». El caso de la MAT ilustra que ya no tenemos una «sociedad sin consistencia», sino una sociedad en la que emergen y tratan de participar múltiples actores sociales que manejan conocimientos técnicos que antes no estaban a su alcance. Los poderes económicos y políticos no tienen ya ante sí unas masas populares amorfas, desinformadas, inermes e impotentes ante las intervenciones de arriba, sino poblaciones instruidas y organizadas, capaces de dotarse de saber experto para enjuiciar con argumentos tecnocientíficos las actuaciones que les afectan y para proponer alternativas discutibles pero técnicamente solventes.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los ciudadanos de a pie han aprendido a desconfiar de las informaciones oficiales y buscan una «contraintervención experta» («contre-expertise») (Callon *et al.* 2001:31). A veces se manejan desde las esferas oficiales definiciones del interés general poco atentas a las realidades locales. Los cargos electos y las entidades asociativas de los territorios afectados reclaman un debate nacional y una intervención experta pluralista que tome en consideración esas realidades locales. Las controversias¹⁹ son poderosos dispositivos de exploración y aprendizaje de mundos posibles.

En el caso de la oposición a la MAT los poderes no han aceptado la controversia ni la consideración de los opositores como interlocutores válidos cuyos argumentos y percepciones pudieran ser instrumentos de exploración y aprendizaje. Esos poderes no han dado ningún paso para impulsar una «gobernanza participativa». Un resultado de este rechazo ha sido amputar la capacidad de innovación. Los poderes y sus técnicos han sido prisioneros de las maneras convencionales de hacer las cosas. El poder político no ha asumido que el mundo está cambiando y que la insostenibilidad ecológica de las viejas técnicas obliga a profundas revisiones. Sigue confiando en unos técnicos celosos de su competencia técnica e impregnados de orgullo corporativo tecnocrático, que no están psicológicamente predispuestos a asumir nuevos paradigmas susceptibles de revelar la fragilidad u obsolescencia de sus saberes, y se enrocan en posturas prepotentes impermeables a la innovación. El poder económico, por su parte, es cobarde: no es propenso a asumir innovaciones mientras no estén sólidamente revalidadas por temor a incurrir en riesgos financieros excesivos. La innovación, en este como en otros casos observados,²⁰ procede más bien de otros lugares de la sociedad: de los centros de investigación inde-

pendientes (como algunos centros universitarios), de los grupos ecologistas, etc.

Un problema casi insuperable para los adversarios de la línea ha sido enfrentarse a dos gobiernos coaligados en torno a un proyecto que plasma una política de interconexión eléctrica asumida por la Unión Europea: ¡David frente a Goliat! Esto plantea la dificultad de una gobernanza participativa en los macroproyectos elaborados desde centros de poder muy alejados de la población. No obstante, si bien los gobiernos estaban firmemente decididos a tirar adelante la interconexión, las distintas soluciones aplicadas en Francia y en España a la opción del soterramiento muestran que puede haber márgenes de negociación incluso cuando el poder no está dispuesto a ceder en lo esencial.

FUENTES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFÍA

CALLON, Michel, Pierre LASCOURMES y Yannick BARTHE (2001): *Agir dans un mode incertain. Essai sur la démocratie technique*, París, Seuil.

CILMA (2009): «La viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques de Girona», boletín trimestral nº 9 (otoño-invierno).

DUNLAP, Riley E., Kent D. VAN LIERE, Angela G. MERTIG y Robert Emmet JONES (2000): «Measuring endorsement of the new ecological paradigm: a revised NEP scale», *Journal of Social Issues*, 56 (3).

HARMS, Hans (2009): *Apuntes críticos y criterios prácticos para la resolución participativa de conflictos ambientales*, Bilbao, Bakeaz («Cuadernos Bakeaz» nº 96).

PEÑAS SÁNCHEZ, Víctor (2004): *El Plan Hidrológico Nacional y sus implicaciones en el País Vasco*, Bilbao, Bakeaz (colección Nueva Cultura del Agua).

¹⁹ Callon y sus colaboradores hablan de «foros híbridos» en los que cooperan los representantes de las empresas y el poder político con otros actores, en particular las poblaciones afectadas que aportan sus percepciones y puntos de vista para contribuir a una mejor toma de decisiones, más atenta a los intereses locales, menos expuesta a conflictos y más susceptible de manejar las incertidumbres inevitables en procesos complejos (Callon *et al.* 2001:50-53).

²⁰ Véase Sempere-Martínez-García 2007: *passim*.

SEMPERE, Joaquim, Mercedes MARTÍNEZ IGLESIAS y Ernest GARCIA (2007): *Ciencia, movimientos ciudadanos y conflictos socioecológicos*, Bilbao, Bakeaz («Cuadernos Bakeaz» n° 79).

Strathern, Marilyn (1999): «What is intellectual property after?», en John Law y John Hassard, eds., *Actor Network Theory and After*, Oxford, Blackwell.

FUENTES PERIÓDICAS Y WEBS

Diari de Girona

El Punt (comarques gironines)

www.collectif-nonalatht.com

www.criirem.org

www.lamalla.cat

www.nomat.org

www.sindic.cat

PERSONAS ENTREVISTADAS

Tres expertos: una mujer (economista y profesora de la Universidad de Gerona, 35 años) y dos

hombres (un médico cirujano, 50 años, y un radiofísico especialista en los efectos de los campos electromagnéticos en la salud, 68 años).

Cinco activistas: dos mujeres (una maestra de Primaria, 52 años, y una titular de una empresa de turismo rural, 45 años) y tres hombres (el alcalde de Crespià y presidente de AMMAT, 45 años, un mecánico electricista, 50 años, y el titular de una empresa de turismo rural, 56 años).

Tanto las personas activistas como las expertas son miembros activos de la Plataforma No a la MAT, salvo el alcalde de Crespià, que preside la asociación de municipios AMMAT.

Ninguna de estas personas está afiliada a ningún partido político ni sindicato, salvo el alcalde de Crespià. Dos de ellas han sido concejales en ayuntamientos pequeños de la zona. En general, declaran haber tenido experiencias asociativas previas y de activismo social de bajo perfil, como asociaciones de vecinos o comisiones de fiestas.

Las entrevistas se efectuaron entre abril y junio de 2010.

